

1 JUL 1991

JOSE MANUEL CUENCA TORIBIO



El piloto del cambio

COMO otras veces, la mirada serena y comprometida de un extranjero encandilado por lo español ha servido para dibujar con la precisión deseada algunos de los contornos fundamentales de la historia presente. Este joven historiador británico, discípulo de Raymond Carr, ha salido airoso del reto de establecer las premisas esenciales de la transición de la dictadura de Franco a la monarquía democrática de Juan Carlos I. Libro de libros con algunas apoyaturas heremográficas —demasiado delgadas y unilaterales—, la obra que comentamos constituye una síntesis bien elaborada, que tiene en el desollegue político su arbolante, con injustificada preferencia en ocasiones de otros aspectos fundamentalmente los sociales.

El término del franquismo es el comienzo del libro de Powell. Cuando los fallos en la salud del "Caudillo" no pudieron ya ocultarse, el propio Franco designó a Carrero como presidente del Gobierno —junio de 1973—. Aunque todavía con viento bonancible en el terreno económico, el régimen comenzaba a dar ya signos de indudable anquilosamiento hasta el punto de que ciertos especialistas lo creían agotado en sus virtualidades al arribar a 1967. Por el contrario, otros estudiosos y biógrafos de Franco sostienen la tesis de que el régimen no murió por falta de ideas, eficacia o popularidad, sino por la desmoralización de algunos de sus sectores y la deslealtad y oportunismo de otros al producirse el asesinato del hombre fuerte del sistema, el mencionado almirante Luis Carrero Blanco —20 de diciembre de 1973—. No obstante, juzgadas ya las postmétrías de la dictadura desde cotas cronológicas adecuadas, cabe afirmar que los deseos de cambio eran tan fuertes y generalizados a la altura de aquel tiempo que infundieron aliento a los círculos más flexibles y alertados del sistema. Unido ello al fermento cancoso de la corrupción del franquismo prepotente y oligárquico determinó que las resistencias al cambio fueran debilitándose conforme se acercaba la hora de la muerte del "Caudillo". Al ser investido a comienzos de enero de 1974 de la presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Arias Navarro debió afrontar la gran apostura histórica de conducir sin traumas a un régimen dictatorial a otro legitimado por el principio democrático y la soberanía nacio-

nal. Este hombre duro del régimen junto con el pequeño y eficaz círculo de colaboradores que le acompañó siempre en su larga travesía por las estructuras de poder del franquismo asumió el gobierno con un esquema no muy arquitrabado de cómo emprender la difícil aventura de desarticular las principales piezas del franquismo y construir, con la aportación de algunas de ellas, el edificio que habría de albergar a una monarquía vista, desde luego, como culminación y ápice de la obra del dictador y no como ruptura abierta con ella conforme deseaba un amplio sector de la oposición cada vez más ancha y audaz. Para llevar a cabo la empresa, Arias tenía depositadas todas sus esperanzas en dar vida a la Ley de Asociaciones Políticas que esbozara ya en 1967 "el propio" ministro José Solís en el seno del Movimiento... Así lo proclamaría en el célebre discurso parlamentario de 12 de febrero de 1974, cuyo "espíritu" infundió esperanzas a los partidarios de la vía reformista y del cambio "gradualista" en la apertura del régimen hacia horizontes auténticamente democráticos.

SIN embargo, vicisitudes internas —antagonismo cada vez más declarado con claras esferas episcopales y sacerdotales, alentadas a la política contestataria por un Vaticano embarcado ya a velas desplegadas en la operación-cambio; malestar laboral y agitación estudiantil— y externas —la revolución de los claveles, 24 de abril de 1974; recesión económica provocada por la guerra del Yon Kipur— condujeron, finalmente, al naufragio de aquellas promesas aperturistas y a la decepción de los sectores partidarios del cambio desde dentro. A los nueve meses de aprobarse el Estatuto de Asociaciones —16 de diciembre de 1974— por el que sólo se autorizaban aquellas asociaciones que aceptasen la legalidad del régimen y sus principios ideológicos, sólo ocho se habían constituido, todas ellas, salvo la excepción de RS, de tendencia francamente continuísta. Destacaba sobre todas "Unión del Pueblo Español" (UDPE), presidida por Adolfo Suárez y que aglutinaba a gran parte del estamento burocrático de la dictadura principalmente en sus estratos superiores. Por lo que hace a la oposición democrática, el Estatuto vino a confirmar

su tesis de la imposibilidad de la reforma intra muros, según proclamaran ya en julio de 1974 todos los miembros que integran la varlopinta Junta Democrática constituida en París por dichos días. En su manifiesto se pedía lisa y llanamente la ruptura democrática —formación de un gobierno provisional, amnistía, implantación del sistema de partidos, autonomía regional, referéndum sobre la forma política del Estado— como una vía posible de acceso hacia la democracia. Entretanto la oposición moderada, configurada por el PSOE, PNV, socialdemócratas y cristiano-demócratas y otras fuerzas similares formarían en julio del mencionado año la Plataforma de Convergencia Democrática, con una línea programática casi idéntica a la del organismo anterior, aunque sin participar del revisionismo monárquico de éste.

EMPERO, el sentimiento popular se disrancaba igualmente de cualquier reaccionarismo o utopía nostálgica como del revanchismo y el salto hacia el vacío. El alto grado de bienestar disfrutado por el país y el horror al retorno de antiguos enfrentamientos, tan operante en la memoria colectiva, creaban un clima de reconciliación y superación de toda suerte de viejos antagonismos en el que se gestaría la transición pacífica hacia una monarquía democrática.

En una acusada atmósfera de "fin de reinado", sobrevendría el fin del régimen. El retroceso experimentado en la situación económica favoreció el malestar laboral y la protesta obrera. La escalada terrorista provocaría a fines de septiembre cinco condenas a muerte, dando lugar a masivas manifestaciones en el extranjero y el plante de tres embajadores. Percatado de la crítica coyuntura que atravesaba el tardofranquismo, Hassan II reivindicaría los derechos sobre un Sahara en plena revuelta contra su potencia colonizadora. En un escenario patético se anunciaría la mortal enfermedad de Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975. El instituto de conservación y el deseo de un cambio sin violencias produjo la unidad moral del país en torno al joven príncipe, que encarnaba el sentido de la continuidad histórica y el acceso natural a un nuevo horizonte.

Sociólogos e historiadores, familiarizados con el papel relevante representado

por las grandes individualidades y las élites de poder, han ponderado en exceso su trascendente labor en el ingente proceso que llevó a España de la dictadura a la democracia. Según la tesis más generalizada sería la clase política la que en todo momento llevó el peso de la operación, jugando el pueblo un papel más pasivo.

EN realidad, sucedió lo contrario. Fue la opinión pública la que desde los días del llamado tardofranquismo accedió con toda precisión el campo de operaciones, al tiempo que delineaba con igual meticulosidad las reglas de juego. Superada por asimilación la guerra civil en el sector más numeroso de la población española, la inmensa tragedia seguía emitiendo el aleccionador mensaje de las consecuencias acarreadas por el fanatismo y la intransigencia así como por la irresponsabilidad de muchos de los líderes políticos-secotades de los años treinta. Nada que ni remotamente pudiera traer al recuerdo la situación de aquellas fechas obtendría el beneplácito de una comunidad pautada ya por normas y moldes de vida muy similares a los de las colectividades más desarrolladas de Occidente. La transición tendría que pasar forzosamente por la moderación y el diálogo. Cualquier postura o movimiento que no partiera de esta idea clave sería inmediatamente abandonado por los elementos mayoritarios del cuerpo social.

Conscientes de tal premisa básica, los dirigentes políticos y sindicales pactaron, tácita o explícitamente, la navegación que había de conducir a un país muy seguro de sus deseos a la recuperación de todas las libertades.

La Corona como institución y el Rey como agente histórico desempeñaron un papel de primer plano en la gran aventura. En 1978, al firmar la Constitución D. Juan Carlos, el país había recobrado la normalidad democrática. Tres años más tarde, al producirse el esperpéntico pronunciamiento de 23 F, la evolución española demostraba que los peores fantasmas de su convivencia estaban definitivamente enterrados. Acertadamente, tan lamentable episodio sirve de colofón a una obra que hace justicia a muchos de los más importantes protagonistas de la transición y de manera más singular al símbolo de la España nueva.